



**Asamblea General**

Distr.  
LIMITADA

A/CN.4/L.656/Add.3  
20 de julio de 2004

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL  
56º período de sesiones  
Ginebra, 3 de mayo a 4 de junio  
y 5 de julio a 6 de agosto de 2004

**PROYECTO DE INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL  
SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 56º PERÍODO DE SESIONES**

**Relator:** Sr. Pedro COMISSÁRIO AFONSO

**Capítulo VII**

**RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS CONSECUENCIAS  
PERJUDICIALES DE ACTOS NO PROHIBIDOS POR EL DERECHO  
INTERNACIONAL (RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EN  
CASO DE PÉRDIDAS DERIVADAS DEL DAÑO  
TRANSFRONTERIZO RESULTANTE DE  
ACTIVIDADES PELIGROSAS)**

**Adición**

**ÍNDICE**

*Párrafos    Página*

- C.    Texto de los proyectos de principios aprobados por la Comisión  
      en primera lectura
- 2    Texto del proyecto de principios y los comentarios  
          correspondientes (*continuación*)

**2. Texto del proyecto de principios y los comentarios correspondientes (continuación)**

**Principio 5**

**Medidas de respuesta**

A fin de reducir al mínimo todo daño transfronterizo dimanante de un incidente causado por actividades comprendidas en el ámbito del presente proyecto de principios, los Estados, en caso necesario con la asistencia del explotador o, cuando proceda, el propio explotador, deberían adoptar medidas de respuesta inmediatas y eficaces. Tales medidas de respuesta deberían incluir la pronta notificación y, cuando proceda, la consulta y la cooperación con todos los Estados que pudieran resultar afectados.

1) Es imposible exagerar la importancia de las medidas de respuesta cuando ha ocurrido un accidente o incidente que ha provocado daños significativos. De hecho, tales medidas son necesarias para limitar la propagación de los daños y deben adoptarse de inmediato. Así se hace en la mayoría de los casos sin perder tiempo siquiera en identificar a la persona responsable a la causa o error que provocó el incidente. El principio 5 asigna al Estado en cuestión la responsabilidad de determinar cómo deben adoptarse tales medidas y quién debe adoptarlas, ya sea el propio Estado, el explotador o alguna otra persona o entidad apropiada. Aunque no se prevé ningún orden operacional en la frase "los Estados, en caso necesario con la asistencia del explotador o, cuando proceda, el propio explotador", se estima razonable suponer que en la mayoría de los casos de daños transfronterizos el Estado habrá de desempeñar un papel más destacado. De hecho, nunca se insistirá lo suficiente en la existencia de una obligación general de los Estados de velar por que las actividades bajo su jurisdicción y control no provoquen daños transfronterizos. Además, el Estado tendría la opción de solicitar un reembolso de los costos de las medidas de respuesta razonables. En el texto también se reconocen los matices diplomáticos que puede haber en tales casos. Por otra parte, no se pretende excluir la posibilidad de que el primero en reaccionar sea un explotador, por ejemplo una empresa transnacional.

2) También es frecuente que las autoridades estatales pasen inmediatamente a la acción y evacuen a las personas afectadas a lugares seguros y presten asistencia médica de emergencia y demás socorro inmediato. Es por este motivo que el principio reconoce el importante papel del Estado al adoptar las medidas necesarias en cuanto se plantea la

emergencia, dada su función de garantizar en todo momento el bienestar público y proteger el interés público.

3) El papel previsto para el Estado en el presente principio complementa la función que se le asigna en los artículos 16 y 17 del proyecto de artículos sobre la prevención, que se refieren a las necesidades de "preparación para casos de emergencia" y "notificación de una emergencia"<sup>108</sup>.

4) Sin embargo, el presente principio debe distinguirse de esas disposiciones, ya que va mucho más allá. Se refiere a la necesidad de adoptar las medidas de respuesta necesarias en el Estado de origen cuando ocurra un incidente que provoque daños, en lo posible antes de que adquieran el carácter de daños transfronterizos. Se prevé que el Estado en que se origina el daño, en interés propio e incluso como obligación derivada de "consideraciones elementales de humanidad"<sup>109</sup>, consulte a los Estados que probablemente van a verse afectados para determinar cuál es la mejor medida de respuesta posible a fin de prevenir o paliar el daño transfronterizo<sup>110</sup>. En la segunda oración del presente principio cabe

---

<sup>108</sup> Para el texto y los comentarios de los artículos 16 y 17 del proyecto de artículos sobre la prevención, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 10 (A/56//10)*, párr. 370 a 436, en las págs. 429 a 433. El punto de vista de que las obligaciones impuestas por tratados de mantener planes para situaciones imprevistas y responder a situaciones de emergencia debidas a la contaminación del medio ambiente deben considerarse parte del deber del Estado de actuar con la debida diligencia en el control de las fuentes de daños conocidos al medio ambiente se expresa en Birnie y Boyle, "International Law..." *op. cit.*, pág. 137. Los autores señalan también en la página 136 que "es legítimo considerar que el asunto *Corfu Channel* hace jurisprudencia en lo que respecta a la obligación consuetudinaria de dar la alerta en caso de peligros conocidos para el medio ambiente".

<sup>109</sup> Véase *Corfu Channel, ICJ Reports* 1949, pág. 4, en la pág. 22. Para la referencia al concepto particular como parte de "obligaciones... basadas en ciertos principios generales y bien reconocidos", a diferencia de las fuentes tradicionales de derecho internacional indicadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, véase Bruno Simma, "From Bilateralism to Community Interest in International Law", *Recueil des Cours*, vol. 250 (1994-VI), págs. 291 y 292.

<sup>110</sup> Acerca de la obligación de los Estados de notificar o consultar a otros Estados a fin de adoptar medidas apropiadas para paliar los daños, y para la cita de instrumentos jurídicos pertinentes, como el principio 18 de la Declaración de Río, la Convención de 1992 sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales, el Convenio sobre la diversidad biológica de 1992 y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y los tratados

distinguir diversos niveles de interacción, a saber, la notificación, la consulta y la cooperación. Se considera que la palabra "pronta" es más apropiada para "notificación", pero puede no ser del todo adecuada en una situación de emergencia con referencia a la "consulta" y la "cooperación", que tienen un carácter más consensual, se basan en la buena fe y por lo general responden a una solicitud. Se considera que la expresión "cuando proceda" es aplicable a esas características y lo suficientemente flexible para abarcar una gran diversidad de procesos de interacción según las circunstancias del caso.

5) A la inversa, se espera que los Estados que probablemente vayan a verse afectados cooperen plenamente con el Estado de origen. Queda entendido que adoptar medidas de respuesta es también importante para los Estados que se han visto o pueden verse afectados por el daño transfronterizo. Estos Estados deberían adoptar las medidas de respuesta que estén a su alcance en las zonas bajo su jurisdicción a fin de contribuir a prevenir o paliar el daño transfronterizo. Dichas medidas de respuesta son esenciales no sólo en el interés público sino también para que las autoridades y tribunales competentes puedan tramitar las subsiguientes reclamaciones de indemnización y reembolso de gastos efectuados para adoptar medidas de respuesta consideradas razonables<sup>111</sup>.

6) Ninguna medida que el Estado adopte en respuesta a la emergencia creada por la actividad peligrosa relega ni debe relegar al explotador a un papel secundario o residual. El explotador tiene igual obligación de mantenerse preparado para casos de emergencia y de poner en práctica medidas de respuesta en cuanto se produce el incidente. El explotador puede y debe dar al Estado toda la asistencia necesaria para que cumpla con sus obligaciones. En particular, el explotador está en la situación mejor para indicar los detalles del accidente, su naturaleza, el momento y el lugar exactos en que se ha producido y las medidas que las partes probablemente afectadas podrían adoptar para reducir al

---

sobre accidentes nucleares y la Convención del OIEA sobre la pronta notificación de accidentes nucleares de 1986, véase Sands, *Principles...*, *op. cit.*, págs. 841 a 847.

<sup>111</sup> En general, en lo que respecta al criterio de lo razonable para calcular los gastos que pueden recuperarse, véase Peter Wetterstein, "A Proprietary or Possessory Interest...", *op. cit.* págs. 47 a 50.

mínimo las consecuencias del daño<sup>112</sup>. En caso de que el explotador no pueda adoptar las medidas de respuesta necesarias, el Estado de origen debería tomar las disposiciones precisas para adoptar tales medidas<sup>113</sup>. Para ello puede recabar la ayuda necesaria y disponible de otros Estados u organizaciones internacionales competentes.

## Principio 6

### Recursos internacionales y recursos internos

1. Los Estados deberían prever procedimientos para garantizar la indemnización, de conformidad con el principio 4 del presente proyecto, de las víctimas de daños transfronterizos derivados de actividades peligrosas.
2. Esos procedimientos podrían incluir el recurso a sistemas internacionales de tramitación de reclamaciones, que sean rápidos y entrañen costos mínimos.
3. En la medida necesaria para proporcionar la indemnización a tenor del principio 4 del presente proyecto, cada Estado debería velar por que sus mecanismos administrativos y judiciales tuvieran la competencia necesaria y ofrecieran recursos eficaces a esas víctimas. Dichos mecanismos no deberían ser menos rápidos, adecuados y eficaces que aquellos de que dispusieran sus nacionales y deberían incluir el acceso adecuado a la información necesaria para utilizarlos.

1) En el principio 6 se indican las medidas necesarias para hacer operativo y aplicar el objetivo enunciado en el principio 4. El **párrafo 1**, en el que se enuncia la obligación de prever procedimientos apropiados para garantizar la indemnización, se aplica a todos los Estados. Dicho párrafo debe compararse con el párrafo 3, en el que las obligaciones que entraña el párrafo se aplican de manera particular a cada Estado.

2) Con el **párrafo 2** se trata de concretar el carácter de los procedimientos pertinentes. Dicho párrafo se refiere a "sistemas internacionales de tramitación de reclamaciones".

---

<sup>112</sup> Los Estados están obligados a notificar esos detalles en caso de incidente nuclear. Véase el artículo 2 de la Convención del OIEA sobre la pronta notificación. También deben dar, por conducto del OIEA, a los Estados que se verán probablemente afectados otra información necesaria para reducir al mínimo las consecuencias radiológicas. Sands, *Principles...*, *op. cit.* págs. 845 y 846.

<sup>113</sup> En virtud de los artículos 5 y 6 de la Directiva 2004/35/CE de la Unión Europea, las autoridades competentes, que se designan en el artículo 13, podrán exigir al explotador que adopte las medidas preventivas o reparadoras necesarias o bien adoptar ellas mismas dichas medidas si el explotador no lo hace o no puede ser localizado.

Pueden preverse varios procedimientos. Por ejemplo, en caso de daños transfronterizos los Estados podrían negociar y acordar el monto de la indemnización pagadera<sup>114</sup>. Puede tratarse de comisiones mixtas de reclamaciones, negociaciones para el pago de una suma global, etc. El componente internacional no excluye la posibilidad de que un Estado de origen haga una aportación al Estado afectado para que éste pague indemnizaciones a través del procedimiento nacional de tramitación de reclamaciones que haya establecido. Salvo que se desee otra cosa, tales negociaciones no deberían impedir las negociaciones entre el Estado de origen y los particulares afectados y entre esos particulares y la persona responsable de la actividad que ha causado el daño sensible. Podría acordarse el pago de una suma global como indemnización, ya sea de resultas de un juicio, ya sea mediante un arreglo extrajudicial<sup>115</sup>. Las víctimas podrían recibir inmediatamente una indemnización

---

<sup>114</sup> En el caso de los daños causados a pescadores nacionales del Japón por los ensayos nucleares llevados a cabo por los Estados Unidos de América en 1954 cerca de las Islas Marshall, este último país pagó al Japón 2 millones de dólares de los EE.UU. Véase E. Margolis, "The Hydrogen Bomb Experiments and International Law", *64 Yale Law Journal* (1955), pág. 629 en las págs. 638 y 639. Acerca de los 3 millones de dólares canadienses pagados en concepto de indemnización por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al Canadá tras el accidente del Cosmos 954 ocurrido en enero de 1978, véase "*Principles...*" *op. cit.*, pág. 887. El autor también señala que, aunque varios Estados europeos pagaron indemnizaciones a sus nacionales por los daños sufridos a consecuencia del accidente nuclear de Chernobyl, no intentaron presentar solicitudes oficiales de indemnización, aun cuando se reservaron el derecho a hacerlo, *ibíd.*, págs. 886 a 889. Cabe mencionar también los proyectos de artículos 21 y 22 aprobados por el Grupo de Trabajo de la Comisión en 1996. En el artículo 21 se recomendaba que el Estado de origen y los Estados afectados negociaran a petición de cualquiera de las partes la naturaleza y la cuantía de la indemnización u otra forma de reparación. El artículo 22 hacía referencia a varios factores que los Estados debían tener en cuenta para determinar el monto más equitativo de la indemnización. Para el informe del Grupo de Trabajo de la Comisión, de 1996, véase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 10 (A/51/10)*, págs. 320 a 327.

<sup>115</sup> En relación con el desastre causado por la fuga de gases en Bhopal, el Gobierno de la India intentó acumular las reclamaciones de las víctimas. Procuró obtener indemnización en primer lugar ante un tribunal de los Estados Unidos, pero, debido a que el foro no era conveniente, (*forum non-convenience*) el asunto se dirimió ante la Corte Suprema de la India. La Ley relativa al desastre causado por la fuga de gases en Bhopal (tramitación de reclamaciones) de 1985 sentó las bases para la acumulación de las solicitudes de indemnización. La Corte Suprema de la India, en el asunto *Union Carbide Corporation v. Union of India and others, All India Reports* 1990 SC 273, dictó una orden en la que fijaba la cuantía de la indemnización que debía pagarse. Dispuso que Union Carbide pagara una suma global de 470 millones de dólares a la Unión de la India como liquidación total de todas las reclamaciones, derechos y obligaciones

razonable con carácter provisional, en espera de la decisión sobre la admisibilidad de la reclamación y sobre la cuantía efectiva de la indemnización pagadera. Unas comisiones nacionales o mixtas de reclamaciones establecidas con ese fin podrían examinar las reclamaciones y decidir la cuantía definitiva de las indemnizaciones<sup>116</sup>.

3) La Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas<sup>117</sup> y la Comisión de Reclamaciones Estados Unidos-Irán<sup>118</sup> pueden servir de modelos útiles para algunos de los procedimientos contemplados en el párrafo 2.

4) La Comisión es consciente de los elevados costos y gastos que entraña presentar reclamaciones a nivel internacional. También sabe cuánto se tarda en resolver algunas reclamaciones internacionales. La referencia a que los procedimientos tienen que ser rápidos y entrañar costos mínimos obedece al deseo de no sobrecargar a la víctima con un largo procedimiento similar a los juicios o actuaciones judiciales que pueda disuadirla de presentar su reclamación. Debe entenderse que esos procedimientos no prejuzgan el derecho de la persona a valerse de otros recursos que le ofrezca el derecho nacional.

5) El párrafo 3 se centra en los procedimientos internos. La obligación incumbe en particular a "cada Estado". Se trata de una disposición relativa al derecho a la igualdad de acceso. Se parte del supuesto de que el derecho de acceso sólo se puede ejercer cuando

---

relacionados con el desastre de Bhopal o derivados de él. La reclamación original del Gobierno de la India era de más de 1.000 millones de dólares.

<sup>116</sup> Véase la concesión en abril de 2002 de 324.949.311 dólares a la población de Enewatak en concepto de daños a la tierra resultantes del programa nuclear llevado a cabo por los Estados Unidos de América entre 1946 y 1958.

<sup>117</sup> Sobre el procedimiento adoptado por la Comisión de Reclamaciones de las Naciones Unidas, véase Mojtaba Kazazi, "Environmental Damage in the Practice of the UN Compensation Commission", en Michel Bowman y Alan Byle, *Environmental Damage...*, *op.cit.*, págs. 111 a 113.

<sup>118</sup> La creación del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos fue una de las medidas adoptadas para resolver la crisis en las relaciones entre la República Islámica del Irán y los Estados Unidos de América resultante de la detención de 52 nacionales de los Estados Unidos en la Embajada de este país en Teherán, que comenzó en noviembre de 1979, y el posterior bloqueo de activos iraníes por los Estados Unidos de América. La información básica puede consultarse en [www.iusct.org](http://www.iusct.org).

existe un sistema adecuado para el ejercicio de los derechos individuales.

Por consiguiente, la primera frase del párrafo 3 se refiere a la competencia de los mecanismos administrativos y judiciales. Esos mecanismos han de estar facultados para resolver reclamaciones relativas a actividades que queden comprendidas en el ámbito de los presentes principios. La primera frase también se refiere a la eficacia de los propios recursos y en ella se destaca la importancia de eliminar obstáculos a fin de garantizar la participación en las audiencias y en los procedimientos administrativos. La segunda frase se refiere a dos aspectos del derecho a la igualdad de acceso. En ella se destaca la importancia de las normas procesales no discriminatorias para la resolución de las reclamaciones relativas a actividades peligrosas. En segundo lugar, la frase trata de la igualdad de acceso a la información. Con la referencia a un acceso "adecuado" se pretende indicar que en determinadas circunstancias se puede denegar el acceso a la información o su divulgación. Sin embargo, es importante que incluso en tales circunstancias se pueda conseguir fácilmente información sobre las excepciones pertinentes, los motivos de denegación, las vías de recurso y los cargos correspondientes, en caso de haberlos. Cuando sea posible, la información debería ser accesible gratuitamente o con un gasto mínimo.

6) El acceso a los procedimientos nacionales que ha de facilitarse en caso de daños transfronterizos debería ser similar al que un Estado ofrece a sus propios nacionales en virtud de su derecho interno. Se recordará que en el artículo 16 del proyecto de artículo sobre la prevención se establece una obligación similar para los Estados en la fase de prevención, durante la cual tienen que gestionar el riesgo con la debida diligencia. En el artículo 32 de la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997 figura una disposición similar relativa a la fase en que se produjo efectivamente el daño, pese a todos los intentos de evitarlo.

7) El derecho a interponer recurso es un principio basado en el acceso equitativo y sin discriminación a los recursos nacionales. Con todas sus desventajas, al dar acceso a la información y garantizar una cooperación apropiada entre los tribunales y las autoridades nacionales competentes a través de las fronteras nacionales, el principio va más allá de la



exigencia de que los Estados alcancen un nivel mínimo de eficacia al facilitar recursos a los demandantes transfronterizos. Esta norma se refleja también en el Principio 10 de la Declaración de Río y en el Principio 23 de la Carta Mundial de la Naturaleza. También tiene cada vez más aceptación en el derecho constitucional nacional relativo a la protección del medio ambiente<sup>119</sup>.

8) El párrafo 3 no palía ni resuelve los problemas relativos a la elección del derecho, que constituye, dada la diversidad y la falta de consenso entre los Estados, un obstáculo considerable para ofrecer recursos y soluciones judiciales rápidos, adecuados y eficaces a las víctimas<sup>120</sup>, en particular si son pobres y no cuentan con asistencia letrada a nivel local. A pesar de estos inconvenientes, representa un paso en la buena dirección, que puede incluso considerarse esencial. Los Estados podrían realizar progresos fomentando la armonización de las leyes y acordando una ampliación del acceso y los recursos disponibles.

9) En virtud del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil pueden facilitarse recursos en los tribunales de una de las partes tan sólo allí donde: a) se ha sufrido el daño; b) el explotador tiene su residencia habitual; o c) el explotador tiene su principal centro de operaciones comerciales. El artículo 19 de la Convención de Lugano de 1993, el artículo 17 del Protocolo de Basilea y el artículo 13 del Protocolo de Kiev ofrecen una elección similar de foros.

## **Principio 7**

### **Elaboración de regímenes internacionales específicos**

1. Los Estados deberían cooperar en la elaboración de acuerdos internacionales apropiados sobre una base mundial, regional o bilateral a fin de concertar arreglos sobre las medidas de prevención y respuesta que habrían de adoptarse con respecto a determinadas categorías de actividades peligrosas así

---

<sup>119</sup> Ibid., pág. 407.

<sup>120</sup> K. W. Cuperus y Alan E. Boyle, "Articles on Private Law Remedies for Transboundary Damage in International Watercourses", en Report of the Sixty-Seventh Conference, Helsinki (Finlandia), (1996), párrs. 403 a 411, pág. 406.

como sobre las medidas de indemnización y las garantías financieras que habrían de preverse.

2. Dichos acuerdos podrán incluir la creación de fondos de indemnización financiados por la industria o por el Estado para proporcionar una indemnización suplementaria en caso de que los recursos financieros del explotador, incluidas las medidas de garantía financiera, fueran insuficientes para cubrir las pérdidas sufridas como resultado de un incidente. Estos fondos podrían tener por objeto incrementar o sustituir los fondos basados en la industria nacional.

1) El principio 7 corresponde a la serie de obligaciones que figuran en el proyecto de principio 4, salvo que se aplican a nivel internacional. En el **párrafo 1** se insta a los Estados a que cooperen en la elaboración de acuerdos internacionales sobre una base mundial, regional o bilateral en tres esferas: a fin de concertar arreglos para la prevención; a fin de concertar arreglos sobre las medidas de respuesta que habrían de adoptarse en caso de accidente con respecto a determinadas categorías de actividades peligrosas para minimizar los daños transfronterizos; y, por último, a fin de concertar arreglos sobre las medidas de indemnización y las garantías financieras que habrían de preverse para asegurar una indemnización pronta y adecuada.

2) En el **párrafo 2** se insta a los Estados a que contribuyan a establecer, a nivel internacional, diversos sistemas de garantía financiera, financiados por la industria o por el Estado a fin de garantizar a las víctimas de daños transfronterizos recursos suficientes, pronto y adecuados. En el **párrafo 2** también se reconoce que, independientemente de lo que los Estados deban hacer a nivel interno para cumplir las medidas de respuesta e indemnización, una línea de actuación más segura y coherente en esta esfera requiere también arreglos internacionales. Este principio señala la necesidad de que los Estados concierten arreglos concretos y los adapten a las circunstancias particulares de las diversas actividades peligrosas. En él también se reconoce que hay diversas variables en el régimen de responsabilidad por daños transfronterizos que es preferible dejar a la discreción de los diversos Estados o de sus leyes o procedimientos nacionales para que las seleccionen o elijan, en función de sus propias necesidades, realidades políticas y fases de desarrollo económico. Es probable que los arreglos concertados a nivel regional con respecto a determinadas categorías de actividades peligrosas resulten más fructíferos y duraderos para proteger los intereses de sus ciudadanos, el medio ambiente y los recursos naturales de los que dependen.

3) También cabe recordar que desde que empezó a examinarse el tema la Comisión partió del supuesto de que su finalidad primordial era "fomentar la elaboración de regímenes para regular, sin recurrir a la prohibición, la realización de cualquier actividad concreta que se advierta que entraña peligros reales o potenciales de carácter esencial y que tenga efectos transnacionales"<sup>121</sup>. Según este punto de vista, el término *liability* entrañaba "un deber de prestación, una obligación (en contraposición a un derecho)"<sup>122</sup> y, por consiguiente, designaba no sólo las consecuencias de una obligación, sino también la obligación misma que, como el concepto de *responsibility*, incluía las consecuencias que de ella se derivan. Este tema, así considerado, trataba de las responsabilidades primordiales del Estado, al tiempo que tenía en cuenta la existencia y la conciliación de "intereses legítimos y de múltiples factores"<sup>123</sup>. Quedaba entendido además que tales actividades incluían la obligación no sólo de formular los principios de la prevención como parte de una obligación de diligencia debida y razonable, sino también de prever establecer un régimen adecuado y aceptado de indemnización, como reflejo de la aplicación de principios equitativos. Esta es la filosofía que impregna todo el plan, cuya designación más apropiada es la de plan de "expectativas compartidas"<sup>124</sup> con "posibilidades ilimitadas" para los Estados<sup>125</sup>.

---

<sup>121</sup> *Anuario...* 1980, vol. II (Primera parte), pág. 259, informe preliminar, documento A/CN.4/334, pág. 262, párr. 9.

<sup>122</sup> *Ibid.*, párr. 12.

<sup>123</sup> *Ibid.*, párr. 38.

<sup>124</sup> Las "expectativas compartidas" son aquellas que: a) "se han expresado en la correspondencia u otras comunicaciones entre los Estados interesados o, en la medida en que no se hayan expresado de ese modo, b) pueden deducirse implícitamente de principios comunes, legislativos o de otro carácter, o de normas de conducta normalmente observadas por los Estados interesados o en cualquier agrupación regional o de otro tipo a que ambos pertenezcan o en la colectividad internacional". Plan esquemático, sec. 4, párr. 4. En cuanto a la naturaleza de las "expectativas compartidas", Barboza explicó que "tienen cierta fuerza de creación de derechos". "Eso cae dentro de la aplicación del principio de la buena fe, del *estoppel*, o de lo que suele llamarse, en algunos sistemas jurídicos, la doctrina de los actos propios." Véase el segundo informe sobre el tema de la responsabilidad internacional, *Anuario...*, 1986, vol. II (Primera parte), documento A/CN.4/402, párr. 22.

<sup>125</sup> Informe preliminar, *Anuario...*, 1980, vol. II, (Primera parte), párr. 48.

## Principio 8

### Aplicación

1. Cada Estado debería adoptar las medidas legislativas, de reglamentación y administrativas necesarias para aplicar los principios del presente proyecto.

2. Los principios del presente proyecto y las disposiciones que los hicieran efectivos deberían aplicarse sin discriminación, como puede ser la que se basa en la nacionalidad, en el domicilio o la residencia.

3. Los Estados deberían cooperar entre sí en la aplicación de los principios del presente proyecto, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.

1) En el principio 8 se reitera lo que se da a entender en los demás proyectos de principio: que cada Estado debe adoptar medidas legislativas, de reglamentación y administrativas para la aplicación de los principios del presente proyecto. También se destaca la importancia de la aplicación nacional mediante la legislación interna de normas u obligaciones internacionales acordadas por los Estados Partes en acuerdos y normas internacionales. En el **párrafo 2** se destaca que esos principios, así como las disposiciones que los hagan efectivos, deben aplicarse sin ningún tipo de discriminación. Las referencias a la nacionalidad, el domicilio o la residencia son sólo ejemplos, aunque ejemplos habituales y pertinentes de estos motivos de discriminación, en el contexto de la resolución de reclamaciones relativas a daños transfronterizos. El **párrafo 3** es una cláusula general, en la que se dispone que los Estados deberían cooperar entre sí en la aplicación de los principios del presente proyecto, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.

2) Esta disposición se basa en el artículo 8 del Protocolo de Kiev. Es imposible exagerar la importancia de los mecanismos de aplicación. Desde la perspectiva del derecho internacional general y convencional el principio actúa en el plano internacional esencialmente entre Estados y debe aplicarse a nivel nacional mediante determinadas técnicas constitucionales internas y otros métodos legislativos. En el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se enuncia el principio fundamental de que *pacta sunt servanda*. En el artículo 27 de la misma Convención figura la conocida norma de que los Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno o la

falta de éstas para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un tratado<sup>126</sup>. Es importante que los Estados promulguen leyes nacionales adecuadas para aplicar estos principios, a fin de que las víctimas de los daños transfronterizos no se queden sin un recurso adecuado.

-----

---

<sup>126</sup> Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice* (Cambridge, 2000), cap. 10, págs. 143 a 161, en la pág. 141. Sobre la aplicación de las decisiones internacionales a nivel nacional, hay numerosas publicaciones referentes a la experiencia de distintos países. Véase Naciones Unidas, *International Law: Collection of Essays* (Nueva York, 1999), cap. III, págs. 165 a 221.